

NACIONES UNIDAS

Asamblea General



CUADRAGÉSIMO NOVENO PERÍODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

SEXTA COMISION
20ª sesión
celebrada el viernes
28 de octubre de 1994
a las 10.00 horas
Nueva York

ACTA RESUMIDA DE LA 20ª SESIÓN

Presidente: Sr. CHATURVEDI (India)

SUMARIO

TEMA 137 DEL PROGRAMA: INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 46º PERÍODO DE SESIONES (continuación)

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, al Jefe de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-794, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

Distr. GENERAL
A/C.6/49/SR.20
2 de noviembre de 1994

ORIGINAL: ESPAÑOL

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

TEMA 137 DEL PROGRAMA: INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 46º PERÍODO DE SESIONES (continuación) (A/49/10, A/49/355)

1. El Sr. OH (República de Corea) expresa su agradecimiento a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por la valiosa labor realizada durante el 46º período de sesiones, elogia a su Presidente, el Sr. Vereshchetin, por su lúcida presentación del informe de la CDI, se congratula de la conclusión del proyecto de estatuto de una corte penal internacional, y rinde especial homenaje al Grupo de Trabajo que lo ha elaborado y a su Presidente, el Sr. Crawford, por sus notables logros.

2. En las resoluciones 47/33 y 48/31 la Asamblea General pidió a la CDI que diera prioridad a la cuestión del estatuto de una corte penal internacional en respuesta al sentir de la comunidad internacional de que había llegado el momento de aceptar la responsabilidad individual por los crímenes internacionales y de crear una corte penal que los juzgara. Ya no debe permitirse que la flagrante violación de las normas internacionales quede impune por falta de un tribunal eficaz. El proyecto de estatuto ofrece una base sólida y equilibrada para ulteriores debates y merece un examen detenido por parte de los Estados Miembros.

3. A reserva de un estudio más detallado, desea formular las observaciones siguientes: primera, en lo que respecta a la creación de la corte, es partidario de un órgano que actúe cuando sea necesario en vez de un órgano permanente. La condición de órgano de las Naciones Unidas, aunque dotaría a la corte de autoridad y legitimidad, podría plantear múltiples problemas jurídicos difíciles de resolver. Por ello, parece preferible, como solución más práctica y flexible, instituir la corte por medio de un tratado multilateral y relacionarla con las Naciones Unidas mediante un acuerdo específico. En lo que respecta a la composición de la corte, no acierta a ver por qué ha de trazarse una distinción rígida entre magistrados con experiencia en derecho penal y magistrados con competencia en derecho internacional.

4. Segunda y pasando a la competencia de la corte, considera la presente versión una clara mejora con respecto al proyecto anterior en dos aspectos: las disposiciones en materia de competencia se han simplificado y aclarado. Es esencial definir con precisión la competencia de un tribunal penal. Lo mismo sucede con el principio nullum crimen sine lege que exige una tipificación específica de los crímenes. A este respecto, tal vez el artículo 20 no sea suficientemente preciso, pero como el estatuto es sobre todo un instrumento de carácter procedimental más que de derecho penal sustantivo, la presente formulación parece adecuada para ulteriores debates.

5. Tercero, en lo que respecta a la aceptación de la competencia de la corte por los Estados, ve con satisfacción que el nuevo proyecto adopta el sistema de la "aceptación" como regla general. Pero este sistema no debería invalidar la finalidad misma de la creación de la corte que es castigar a los criminales. Por tanto, el requisito de aceptación debe sufrir dos excepciones: la competencia inherente respecto del crimen de genocidio y el caso de recurso a la corte iniciado por el Consejo de Seguridad.

/...

6. Cuarto, en cuanto a las disposiciones de procedimiento penal, aunque en el nuevo proyecto éstas se han mejorado, algunos aspectos siguen siendo problemáticos: por ejemplo, el párrafo 5 del artículo 26, que permite a la junta de gobierno examinar la resolución de la fiscalía de no iniciar la instrucción o no pedir auto de procesamiento, podría socavar sustancialmente la independencia del fiscal; artículo 41, relativo al principio non lis in idem, ya que dispone que el principio no es aplicable si el acto de que se trate se calificó de delito ordinario; por último, otro aspecto que se ha soslayado es todo lo relativo a la financiación de la corte.

7. Dadas las graves violaciones de las normas fundamentales de derechos humanos que en los últimos años se han cometido en Bosnia, Rwanda y otras partes del mundo ha surgido un impulso hace mucho esperado para crear una corte penal permanente. La comunidad internacional no debe dejar pasar esta oportunidad de crear un mecanismo para combatir los crímenes de alcance internacional. Ahora bien, el proyecto de estatuto debe lograr el apoyo más amplio posible para que la futura corte sea un órgano eficaz. Es importante aprovechar el momento favorable, pero no lo es menos encontrar un denominador común. Antes de convocar una conferencia diplomática aún se necesita tiempo para examinar detenidamente el proyecto y para que los Estados celebren consultas intensas, ya sea en una comisión preparatoria o en consultas oficiosas, a fin de llegar a un consenso sobre las cuestiones pendientes.

8. El Sr. KOTSEV (Bulgaria) felicita al Sr. Vereschchetin su esclarecedora presentación del informe de la CDI y agradece a ésta los progresos sustantivos realizados en el 46º período de sesiones, sobre todo la aprobación final del proyecto de estatuto de una corte penal internacional. También da las gracias a los demás miembros de la CDI, así como al personal de la Secretaría, por su dedicación y profesionalidad.

9. Al dar prioridad al examen del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y concretamente a la rápida conclusión del proyecto de estatuto de una corte penal internacional, la CDI no sólo ha atendido a la petición hecha en la resolución 48/31 de la Asamblea General, sino que ha demostrado capacidad para responder a las urgentes expectativas de la comunidad internacional. Bulgaria siempre ha apoyado la propuesta de crear un órgano penal internacional con competencia respecto de las violaciones más graves del derecho internacional y reitera su firme adhesión a la lucha contra esos crímenes en todas sus formas. Confía en que la futura creación de una corte penal internacional sea una medida eficiente para disuadir a los posibles autores de esos crímenes.

10. El actual proyecto de estatuto representa una notable mejora frente al del año anterior, ya que ofrece un documento flexible y equilibrado que armoniza la necesidad de una jurisdicción penal internacional con el respeto de la soberanía estatal. Asimismo, está en consonancia con los principios de los sistemas nacionales de justicia penal y con los instrumentos internacionales vigentes en la materia. Es acertada la premisa de que la corte tenga una función complementaria de los sistemas de justicia penal nacional, ya que ello facilitará su aceptación por los diferentes Estados y eficaz represión de los crímenes de alcance internacional más graves.

11. El proyecto ofrece una buena base para las negociaciones con miras a llegar a un consenso. Sin embargo, conviene señalar algunas deficiencias, así como un punto de desacuerdo, debidos al carácter delicado y complejo del tema. Primero, en lo que respecta a la creación de la corte, preferiría que se hiciera por medio de un tratado internacional multilateral, porque ello contribuiría al prestigio de la corte como institución objetiva e imparcial. Por otra parte, la relación entre las Naciones Unidas y la corte penal internacional debería establecerse mediante un acuerdo separado que dispusiera que la financiación correrá a cargo de las Naciones Unidas. Es aceptable que la corte funcione como institución judicial permanente, pero que sólo se reúna cuando se le someta un asunto. En lo que respecta a la elección de los magistrados opina que la distinción entre personas con experiencia en derecho penal y personas con competencia en derecho internacional es demasiado categórica y que debería bastar con satisfacer una de las dos calificaciones.

12. Segundo, en cuanto a la compleja cuestión de la competencia de la corte, apoya el esquema del actual artículo 20 que prevé dos categorías de crímenes sujetos a la competencia de la corte, a saber: los crímenes de derecho internacional general y los definidos en tratados. Por lo demás, hay que hacer un análisis más detenido de los crímenes incluidos en el anexo, ya que algunos de ellos podrían reprimirse mejor mediante la cooperación interestatal sobre la base del principio aut dedere aut judicare. Apoya también la idea de la aceptación voluntaria de la competencia de la corte, salvo en los casos de "competencia propia" respecto del crimen de genocidio o cuando el Consejo de Seguridad le remita un asunto con arreglo al Capítulo VII de la Carta.

13. En lo tocante al sistema de aceptación por los Estados de la competencia de la corte, Bulgaria expresó en el precedente período de sesiones la opinión de que lo mejor sería que la competencia fuera obligatoria para los Estados partes en el estatuto. No obstante, comprende la solución pragmática consistente en la declaración de "aceptación", prevista en el artículo 22.

14. En cuanto al derecho aplicable por la corte, es indudable que las fuentes del derecho aplicable deberían ser el estatuto de la propia corte, los acuerdos anexos, así como los principios generales del derecho internacional y, en cierta medida, las disposiciones de la jurisdicción nacional. El año anterior, Bulgaria sostuvo que el derecho interno de los Estados no debería ser ni siquiera indirectamente una fuente de derecho aplicable, porque en los ordenamientos internos los crímenes y las penas se definen de forma diferente y ello generaría una violación del principio de igualdad de todos ante la corte y ante la ley. Esto conduce a la cuestión de la competencia ratione materiae, que debería basarse en normas bien definidas y generalmente aceptadas por la comunidad internacional. El instrumento internacional más adecuado para establecer el derecho sustantivo que requiere el eficaz funcionamiento de la corte es el código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. La CDI debe acelerar sus trabajos sobre el tema, definiendo las diferentes categorías de los crímenes más graves y las penas correspondientes, y así se observaría de hecho el principio nullum crimen nulla poena sine lege.

15. Bulgaria, resuelta a luchar contra los crímenes internacionales más graves en todas sus formas, respalda la creación de una jurisdicción penal internacional eficaz basada en la amplia aceptación de los Estados. Deben redoblar los esfuerzos por alcanzar un amplio consenso y ultimar el texto del

proyecto de estatuto. Para ello lo mejor sería que la Asamblea General actuara con rapidez, estableciendo el procedimiento preparatorio y convocando una conferencia diplomática sobre la cuestión en el próximo futuro.

16. El Sr. NATHAN (Israel) felicita a la CDI por la concienzuda y diligente labor de preparación del proyecto de estatuto de una corte penal internacional, tarea cuajada de complejísimos problemas, dada la multiplicidad de sistemas jurídicos de los Estados participantes. Se da por sentado que en una fase ulterior el estatuto se vincule al código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad del que puede formar parte integrante.

17. Aún reconociendo los importantes cambios introducidos en el presente proyecto, desea formular algunas observaciones. En lo que respecta a la relación entre la corte y las Naciones Unidas (art. 2), aquélla no debe ser necesariamente parte del sistema como órgano judicial. Para lograr la máxima aceptación y eficacia posibles, es indispensable un compromiso asumido por tratado. La relación entre las Naciones Unidas y la corte debe asimismo establecerse por medio de un acuerdo. En cuanto a las condiciones que han de reunir los magistrados y la elección de los magistrados (art. 6), considera que no debe ser una condición absoluta que todos los magistrados tengan experiencia en derecho penal, pero sí es imprescindible que una mayoría de ellos tenga ese tipo de experiencia, particularmente en la Sala de Primera Instancia. Sugiere, además, que se prevea el derecho de renuncia de los magistrados, como en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En lo que respecta a la recusación de los magistrados (párrafo 3 del artículo 11), considera que deben precisarse los motivos por los que puede pedirse tal recusación. La fiscalía (art. 12), debe ser independiente de la corte y no un órgano de ella. La fórmula del artículo 12, "la fiscalía es un órgano autónomo de la corte", parece un tanto contradictoria. La fiscalía puede ser "independiente" o puede ser "un órgano de la corte", pero no ambas cosas a la vez.

18. En lo que respecta a los privilegios e inmunidades (art. 16), la disposición de que los magistrados gocen de privilegios e inmunidades durante el desempeño del cargo, aunque la corte no esté reunida, parece excesiva si se compara con el Artículo 19 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Refiriéndose al reglamento de la corte (art. 19), no niega la especial importancia de las reglas de la prueba en un juicio penal, pero opina que esas reglas no deben especificarse en el propio Estatuto. En cambio, convendría ampliar las normas establecidas en el inciso g) del párrafo 3 del artículo 41 y en el artículo 44, incluyendo algunas de las normas fundamentales en materia de prueba.

19. Los crímenes que son de la competencia de la corte (art. 20), deben ser particularmente odiosos, de alcance internacional y susceptibles de una tipificación precisa. Deben ser considerados universalmente actos criminales y, si están previstos en tratados, éstos deben haber logrado la aceptación más amplia de la comunidad internacional.

20. A este respecto, se distinguen en el proyecto dos categorías de crímenes: los incisos a) a d) del artículo 20 se refieren a los crímenes del derecho internacional general, en tanto que el inciso e) trata de los "crímenes previstos en tratados". Por lo demás, en el artículo 20 debería haberse incluido expresamente el "terrorismo", puesto que, referido a una enumeración de

actos criminales concretos dirigidos contra la población civil, reúne todos los requisitos para ello y se reconoce como delito con arreglo al derecho internacional. En el inciso c) la expresión "violaciones graves" de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados no es suficientemente clara, y el inciso e) contiene una limitación de la competencia de la corte respecto de los crímenes definidos en tratados que, si bien puede ser necesaria para que la corte sólo conozca de hechos excepcionalmente graves, puede plantear serios problemas de interpretación y aplicación.

21. La lista de crímenes previstos en tratados, que figura en el anexo del estatuto no debería incluir, al menos por ahora, el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra por que a diferencia de los Convenios, no reúne el requisito de aceptación amplia, si no casi universal. En cambio, es acertada la sugerencia del representante del Canadá de incluir el Protocolo de 1971 para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos, complementario del Convenio de Montreal.

22. En el inciso b) del artículo 21, debería haberse exigido también la aceptación del Estado del que es nacional el acusado. En cuanto al artículo 22, apoya el sistema de aceptación de la competencia: en cambio tiene reservas en cuanto a la disposición del artículo 23, porque el Consejo de Seguridad es un órgano político y en ningún caso debería participar en el procesamiento de personas. De hecho, si es el primer órgano que determina que se ha cometido el acto de agresión motivo de la denuncia, su decisión puede influir indebidamente en la que adopte luego la corte. Más valdría, en definitiva, suprimir tal disposición.

23. Tratándose de las cuestiones de procedimiento, cree que en el artículo 27, debería autorizarse al fiscal para modificar el auto de procesamiento, con la venia de la Junta de Gobierno. Considera que deberían limitarse las muy amplias excepciones del artículo 27 al principio de que el juicio debe tener lugar en presencia del acusado. En cuanto al artículo 38, sugiere que se permita al acusado alegar en su defensa que el auto de procesamiento no revela que se haya cometido un delito según el estatuto, pedir que se agreguen detalles al auto de procesamiento o pedir la modificación de éste.

24. El inciso a) del artículo 39 debería ser más concreto y establecer que el acto u omisión es un crimen de los previstos en el artículo 20, lo que significa que también lo es con arreglo al derecho internacional. En vez de su redacción actual, el inciso b) debería decir "a menos que el acto u omisión constituya un crimen de conformidad con el tratado pertinente en el momento en que tuvo lugar el acto u omisión".

25. Refiriéndose al inciso g) del artículo 41, señala que, según el derecho israelí, el acusado tiene derecho a guardar silencio y a abstenerse de prestar testimonio, pero que ese silencio puede interpretarse en el sentido de que refuerza las pruebas de la acusación y como una corroboración de éstas, si fuere necesario. En lo relativo a la práctica de la prueba, sugiere que se agregue al artículo 44 un párrafo que diga: "Se adoptarán otras normas en el marco de las reglas sobre la práctica de la prueba que se incluirán en el reglamento que se adopte a tenor del artículo 19". En el párrafo 3 debería señalarse que para resolver sobre la cuestión deberá oírse a las partes o a sus representantes.

26. En el párrafo 1 del artículo 45, que trata del quórum y de la sentencia, debería establecerse que todos los miembros de la sala de primera instancia deben estar presentes en todas las fases del juicio, lo que permitiría suprimir el párrafo 3, puesto que de esta manera las salas siempre se compondrían de un número impar de magistrados. Además, el párrafo 5 debería contemplar la posibilidad de opiniones disidentes. En la cuestión de las penas, a que se refiere el artículo 47, debe haber total certeza respecto de la pena aplicable y, ante todo, el acusado debe ser condenado de conformidad con las normas aplicables en el Estado en que se cometió el crimen y donde debió haber sido procesado.

27. Refiriéndose al artículo 49, considera que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 50 o salvo en los casos en que la sala de primera instancia haya excluido pruebas erróneamente, la sala de apelaciones no debe admitir la presentación de pruebas. En los incisos a) y b) debería agregarse una disposición que autorizara a la sala de apelaciones para remitir el caso a la sala de primera instancia con las instrucciones que le parezcan oportunas, incluso las de practicar otras pruebas y dictar una nueva sentencia.

28. Por lo que toca al artículo 51, debería facultarse a la corte para exigir el traslado temporal de un testigo con el fin de realizar careos y de practicar pruebas, con el correspondiente pago de dietas, viáticos, etc.

29. Finalmente, con respecto al artículo 53, sugiere que se permita al acusado impugnar la orden de detención y traslado en la forma y mediante el procedimiento generalmente previstos en los convenios de extradición, y que se prevea la posibilidad de dejarlo en libertad bajo fianza hasta que tenga lugar el traslado. El párrafo 4 de este artículo plantea el problema de dar preferencia a la solicitud de la corte antes que a las de los Estados requirentes con arreglo a los convenios de extradición vigentes; y sugiere que se contemple una opción al respecto en favor del Estado requerido.

30. El Sr. CHIMIMBA (Malawi) hace suyos los propósitos del proyecto de estatuto de una corte penal internacional y considera que el texto elaborado por la CDI es equilibrado. Sin embargo, el preámbulo plantea una serie de problemas fundamentales en cuanto a las relaciones interestatales y a la relación entre el Estado y el individuo, que deberán resolverse antes de convocar una conferencia de plenipotenciarios para adoptar el estatuto. Hay que evaluar las consecuencias jurídicas de la creación de la corte para el desarrollo del derecho internacional y percibir la función que ha de cumplir en definitiva en el orden jurídico internacional.

31. La creación de una corte penal internacional pone seriamente a prueba el principio de la soberanía en el derecho internacional contemporáneo, y hay que ver si se ha logrado un buen equilibrio. Cabe preguntarse si la creación de tribunales transitorios de esta naturaleza para conocer de sucesos gravísimos ha obedecido a razones más fundamentales que la simple opción entre un órgano permanente y uno transitorio, y también qué efecto tendrá la existencia de un tribunal permanente en las relaciones internacionales.

32. En cuanto a los crímenes respecto de los cuales tendrá competencia la corte, tal vez convendría distinguir entre la criminalidad "individual" y la criminalidad "sistemática" esto es, entre los crímenes que se cometen por

motivos egoístas y los que se comete en gran escala, con el estímulo o la connivencia de las autoridades. El caso es que algunos de los tratados enumerados en el Anexo reglamentan o prohíben conductas, pero sólo sobre una base interestatal, por lo que seguramente se plantearán problemas en razón de la distinta manera como los Estados perciben la relación entre el derecho interno y el derecho internacional.

33. Aunque el proyecto de estatuto contempla garantías para el acusado, no está seguro de que se haya resuelto cabalmente la cuestión de si el sistema en conjunto es o no equitativo. No se sabe, por ejemplo, si es justo trasladar al acusado de una jurisdicción nacional a una internacional, en especial si ésta es permanente. Hay cuestiones de derechos humanos que llevan a preguntarse si se ha encontrado un buen equilibrio.

34. Otra cuestión que ha de examinarse es la relación entre la corte y las Naciones Unidas. Actualmente se está discutiendo la reforma de la Organización, lo que probablemente llevará a enmendar la Carta. No parece demasiado aventurado, pues, proponer que la corte sea uno de los órganos principales de la Organización, de tal modo que la cuestión forme parte del conjunto de reformas propuestas. Agrega, para terminar, que no es partidario de convocar de inmediato una conferencia internacional, sino más bien de tratar los problemas que plantea la adopción del estatuto en un proceso preparatorio que podría, además, vincularse con las actividades del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional.

35. El Sr. HILGER (Alemania) dice que los acontecimientos de los últimos años han demostrado que hay casos en que los Estados no pueden cumplir su función de procesar y, llegado el caso, condenar a los criminales. El elevado número de conflictos regionales en que se cometen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos indica que urge adoptar medidas prácticas para llegar a una forma de jurisdicción penal universal. Por ello Alemania acogió complacida en su día la resolución del Consejo de Seguridad de establecer un tribunal internacional para enjuiciar a las personas responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia y consciente de sus obligaciones al respecto, ha elaborado un proyecto de ley destinado a sentar las bases de la cooperación con este tribunal, proyecto que recientemente se ha sometido a los órganos legislativos.

36. El proyecto de estatuto preparado por la CDI es un buen método para abordar la creación de una corte penal internacional de carácter permanente, que debería establecerse mediante un tratado. Desde el punto de vista sustantivo, lo mejor sería que formara parte de la Carta de las Naciones Unidas, pero dadas las dificultades que ello entraña, probablemente habrá que optar por un tratado multilateral. Una de las cuestiones clave es la forma en que la corte se vinculará con las Naciones Unidas y, al respecto, se ha previsto que el Consejo de Seguridad pueda remitirle asuntos. Otra cuestión que habrá de examinarse detenidamente es la integración administrativa y financiera de la corte en el sistema de las Naciones Unidas.

37. El proyecto de estatuto de la CDI dispone que los Estados que pasan a ser parte en el tratado aceptan ipso jure la competencia de la corte respecto del crimen de genocidio. Esta competencia ex officio debería ampliarse, ya que el

sistema de las declaraciones de aceptación puede llevar a que la corte desempeñe muy pocas funciones prácticas, o incluso ninguna, por la falta de un número suficiente de declaraciones, aun con un número suficiente de Estados dispuestos a instituirlos.

38. Algunos extremos merecen reflexión. Es algo preocupante que el artículo 12 contemple la independencia total de la fiscalía. En realidad, para que los intereses de la comunidad internacional estén debidamente representados en la corte penal internacional, las actividades del fiscal deben vincularse con las decisiones de un órgano de las Naciones Unidas, en una forma que habrá de especificarse. Otra cuestión que ha de seguir estudiándose es la del reglamento de la corte: corresponde al propio estatuto regular el desarrollo de las investigaciones y del juicio, en especial la presentación de los medios de prueba. Asimismo, el hecho de que el artículo 20 se refiera a diversas categorías de crímenes, sin señalar los hechos o elementos que los constituyen, hace dudar de que se hayan respetado los principios de claridad y de finalidad, que en derecho penal son fundamentales. En su forma actual el artículo 20 no cumple con el principio de que sólo se puede sancionar un delito si la responsabilidad penal estaba determinada antes de la comisión del acto. Esta laguna debe subsanarse y, al respecto, conviene remitirse a las disposiciones correspondientes del Estatuto del Tribunal Internacional establecido para la ex Yugoslavia. En cuanto al artículo 28, no parece del todo satisfactorio: el estatuto debe especificar requisitos inequívocos para la detención de los sospechosos y prescribir que deberán ser llevados a comparecer ante el juez competente dentro de un plazo breve.

39. En relación con los derechos del acusado, en principio son suficientes las garantías mínimas enunciadas en el artículo 41, pero deberían añadirse normas sobre la asistencia letrada, principalmente para los casos en que la corte deba nombrar de oficio un defensor. En cuanto a la imposición de la pena (artículo 46), es preciso aclarar que el criterio básico es la culpabilidad del criminal, mientras que las circunstancias individuales de la persona declarada culpable y la gravedad del crimen no son más que elementos complementarios. Por último, preocupa la falta de una gama concreta de penas en el Estatuto. Sin embargo, la formulación del párrafo 2 del artículo 46 podría ser aceptable si en su parte inicial se sustituyera la frase "la Corte podrá tener en cuenta" por la frase "la Corte deberá tener en cuenta".

40. En general, el proyecto es una base de codificación excelente. Es oportuna, pues, la idea de que se convoque una conferencia internacional, que ha de ser cuidadosamente preparada, para examinar el texto en profundidad con miras a celebrar la convención pertinente.

41. El Sr. KARAM (Egipto), refiriéndose al proyecto de estatuto de una corte penal internacional, dice que la necesidad de establecer un órgano permanente de esa índole empezó a sentirse hace unos 50 años, al concluir la segunda guerra mundial. Esa necesidad se ha vuelto cada vez más urgente, habida cuenta de los horrendos crímenes que a diario presencia la humanidad. Es cierto que las relaciones internacionales han conocido en los últimos años algunos cambios positivos, en particular, la terminación de la guerra fría y la distensión entre el Este y el Oeste. Ahora bien, parece que esos cambios positivos han producido efectos inversos en los planos regional y subregional, donde se intensifican los

/...

conflictos, abundan situaciones de guerra civil y aumentan la criminalidad y los casos de violación, genocidio y depuración étnica.

42. Ante esa realidad, las Naciones Unidas han respondido estableciendo tribunales especiales para juzgar por separado las violaciones del derecho humanitario internacional, como el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y estudiando la posibilidad de extender la competencia de ese Tribunal a las atrocidades cometidas en Rwanda. La creación de esos tribunales especiales requiere tiempo y esfuerzos prolongados para concertar los arreglos correspondientes. Por ello, Egipto considera que una corte permanente puede ser el órgano judicial apropiado para conocer de esos graves crímenes internacionales y que, al constituirse en fuente de autoridad única, podría evitar el riesgo de decisiones conflictivas que debilitaran la fuerza legal de las sentencias.

43. Refiriéndose concretamente al proyecto de estatuto, considera que lo ideal sería que las relaciones entre la corte y las Naciones Unidas se fijaran mediante una convención análoga a la que debe concertarse entre las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Los demás métodos propuestos plantean serias dificultades. En primer lugar, la idea de que la corte sea considerada el órgano judicial principal de la estructura de las Naciones Unidas se contradice con el Artículo 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y, por lo tanto, exigiría que se enmendaran ese Estatuto y la Carta de las Naciones Unidas. La segunda variante, es decir, considerar la futura corte como órgano subsidiario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tendría pocas probabilidades de aceptación, dadas las diferencias de naturaleza y competencia entre ambas cortes, que no permiten suponer la existencia de un orden jerárquico entre ellas.

44. En cuanto a la propuesta de que la relación entre la corte y las Naciones Unidas se establezca en virtud de una resolución de la Asamblea General, observa que ese método ya ha sido empleado en la aplicación de algunas convenciones internacionales. Así se procedió, por ejemplo, en los casos del Comité de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se trata, sin embargo, de situaciones radicalmente distintas: por su condición y por la naturaleza de sus funciones, la corte precisa de un alto grado de independencia y no necesita un departamento muy numerosos para que su secretaría tramite los asuntos que se le presenten.

45. En otro orden de ideas, sería oportuno reformular el inciso a) del párrafo 2 y el párrafo 3 del artículo 42. La instauración del nuevo sistema penal internacional garantizará sin duda una mayor eficiencia e integridad, pero para ello es indispensable la cooperación con los tribunales nacionales a los que la corte tendría que servir de complemento, sin arrogarse las funciones que les corresponden ni pasar por alto sus sentencias o decisiones de aquéllos.

46. Cree que debería examinarse de nuevo el párrafo 1 del artículo 23, ya que la lectura conjunta de ese párrafo y el párrafo 3 da lugar a conclusiones ambiguas con respecto al derecho de los Estados previsto en el artículo 21. Si la corte no quiere perder credibilidad, el ejercicio de su competencia debe estar libre de toda orientación política y de los efectos de las relaciones internacionales. En general, no hay inconveniente en que el Consejo de Seguridad tenga la facultad de remitir determinados asuntos a la corte, pero

ello deberá hacerse sin menoscabo del derecho que asiste a los Estados de aceptar la competencia de la corte. No parece, pues, necesario ampliar la categoría de asuntos que el Consejo pueda remitir a la corte. Tal vez sea aconsejable limitar esa facultad a los casos de agresión que, a juicio del Consejo, comprometan la paz y la seguridad internacionales. Incluso puede haber casos en que la corte decida renunciar a su competencia por entender que no se han producido violaciones de las convenciones internacionales mencionadas en el Estatuto y el Anexo o considerar que la decisión del Consejo de Seguridad de remitirle un asunto ha obedecido a presiones políticas, con el pretexto del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

47. A pesar de esas observaciones generales y de otras que formulará oportunamente, considera que el proyecto de estatuto es una base viable para futuras negociaciones y apoya la recomendación de la CDI de que la Asamblea General convoque una conferencia de plenipotenciarios con objeto de dar cima a la empresa. Esa conferencia debería celebrarse en 1995.

48. El Sr. MOMTAZ (República Islámica del Irán) dice que la cuestión de la naturaleza jurídica de los vínculos que unirán a la corte penal internacional con las Naciones Unidas reviste una importancia fundamental. Tal asociación no sólo garantizará el carácter y la autoridad moral de la corte, sino que también le permitirá, en ciertas condiciones, recurrir a los servicios de las Naciones Unidas, como se prevé en el artículo 2 del proyecto. Esa disposición permitirá a la corte celebrar con la Organización un acuerdo de vinculación, de conformidad con el Artículo 57 de la Carta, acuerdo que deberá ser sometido a la aprobación de la Asamblea General, a tenor del Artículo 62 de la Carta.

49. Las cuestiones abordadas en el párrafo 3 del artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 4 deberían tratarse en un artículo separado, titulado "Capacidad jurídica de la Corte", ya que parece fuera de lugar toda referencia a esa cuestión en el artículo 3, relativo a la sede de la corte. Además, en el párrafo 3 del artículo 3 parece preferible reemplazar el término "acuerdo" por "protocolo".

50. La distinción que se hace en el párrafo 1 del artículo 6 parece demasiado rígida. Bastaría exigir que los futuros magistrados satisficieran una de las dos condiciones.

51. La República Islámica del Irán reitera las reservas que ya expresara el año anterior en relación con el artículo 15 del proyecto. Parece preferible la fórmula empleada en el Artículo 18 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia porque, en primer lugar, tiene una redacción general que no hace referencia expresa a casos precisos, por definición muy poco comunes. Además, la norma de la unanimidad ofrece garantías más sólidas que la de la mayoría de dos tercios a que se refiere el inciso b) del párrafo 2 del artículo 15, porque así se favorece la independencia de la función del magistrado.

52. El artículo 20 del proyecto, una de las disposiciones más importantes del Estatuto, presenta algunos problemas. Por ejemplo, lo que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977 califican de infracción grave abarca, en realidad, todos los casos tipificados en el inciso c) del artículo 20. Esos instrumentos, especialmente los cuatro Convenios de Ginebra, constituyen sin duda la expresión de una costumbre internacional bien

establecida y, en razón del gran número de Estados que los han ratificado, están al mismo nivel que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y, sin embargo, no se les atribuye la misma autoridad moral y jurídica. La referencia a crímenes concretos que se hace en el artículo 20 parece sumamente juiciosa, en la medida en que facilitará el ejercicio de la competencia de la corte en varios casos muy precisos. Por otra parte, parece una laguna difícilmente justificable que en el artículo 20 del proyecto no se mencione el crimen de apartheid por las mismas razones que el de genocidio.

53. Deberá complementarse el artículo 21 con la aceptación de la competencia de la corte por el Estado de que sea nacional del acusado, puesto que la nacionalidad representa un vínculo determinado y significativo a efectos de lealtad y jurisdicción. Además, el párrafo 2 del artículo 21 trata en parte esta cuestión, ya que en muchos casos, el Estado que solicite la entrega del sospechoso será el de la nacionalidad del acusado.

54. Los párrafos 1 y 2 del artículo 23 tienen un fundamento excelente. No cabe duda, en efecto, que, a tenor del Artículo 39 de la Carta, sólo el Consejo de Seguridad puede determinar la existencia de un acto de agresión. Es cierto que también determina la existencia de amenazas a la paz y quebrantamientos de la paz, pero no es menos cierto que no tiene el monopolio de la consideración de esas situaciones. Se limitaría excesivamente la competencia de la corte si se le impidiera procesar a los sospechosos mientras el Consejo de Seguridad estuviese examinando esas situaciones. Además, en los últimos años el Consejo de Seguridad ha tendido a interpretar de manera cada vez más amplia la noción de amenaza contra la paz, y ha llegado a englobar en ella prácticamente todas las situaciones propicias a la realización de los crímenes tipificados en el Estatuto. No parece lógico obstaculizar la puesta en marcha de los mecanismos previstos en el estatuto a raíz de declaraciones políticas hechas en otros foros. En consecuencia, debería suprimirse el párrafo 3 del artículo 23.

55. A pesar de que el Grupo de Trabajo sobre el proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional se ha esforzado por combinar en un todo coherente los elementos de distintas tradiciones jurídicas, parece que los artículos 37 y 47 del proyecto se inspiran en un sistema penal particular. El artículo 37 prevé, en casos excepcionales, el juicio en rebeldía. Es curioso observar que en el inciso c) del párrafo 2 se permite el proceso in absentia si el acusado se ha fugado mientras estaba legalmente bajo custodia o se hallaba en libertad provisional bajo fianza, pero no se ofrece a la corte esa posibilidad si el acusado no fue nunca detenido. No se comprenden bien las razones de esa distinción, ni sus consecuencias. Si bien ha de reconocerse la necesidad de respetar el principio del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el acusado se halle "presente en el proceso", sería en interés de la comunidad internacional que la corte pudiera celebrar el juicio en rebeldía y dar a conocer a la opinión pública mundial algunos hechos, y que por lo menos pudiera identificar a los responsables de crímenes odiosos y ponerlos así fuera de la ley. Además, para evitar las contradicciones con el Pacto, se podría en esos casos no aplicar automáticamente la pena pronunciada en rebeldía y esperar la comparecencia del acusado ante la corte y una revisión del fallo.

56. El artículo 47 no tiene en cuenta que un gran número de sistemas penales siguen aplicando la pena capital a los responsables de los crímenes más odiosos en particular, de los tipificados en el proyecto de estatuto. La facultad

establecida en el párrafo 2 del artículo 47 de determinar la duración de la pena privativa de libertad o de la cuantía de la multa debería extenderse a la determinación de la pena de manera general.

57. La competencia de la corte deberá limitarse a la represión de los crímenes más graves de carácter internacional y la declaración de aceptación no entraña necesariamente la pérdida de la competencia de los tribunales nacionales. Antes bien, la corte deberá ayudar a esos tribunales en los casos en que el enjuiciamiento de los acusados fuere difícil, sino imposible. Cabe esperar que el proyecto de estatuto pueda ser examinado en un futuro cercano en una conferencia de plenipotenciarios y que finalmente la corte penal internacional se haga realidad.

58. La Sra. DES ILES (Trinidad y Tabago), hablando en nombre de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM)), dice que el proyecto de estatuto de una corte penal internacional es un instrumento equilibrado que ofrece varias fórmulas de transacción en cuestiones fundamentales, lo que facilitará la aceptación más amplia posible por los Estados Miembros. Tal como se prevé en el artículo 2 del proyecto, la corte deberá establecerse por medio de un tratado multilateral, con un acuerdo que establezca una relación apropiada con las Naciones Unidas.

59. La competencia de la corte debe limitarse a los crímenes graves de carácter internacional. Es correcta la distinción que se hace en el artículo 20 entre dos categorías de crímenes: los del derecho internacional general y los definidos en las disposiciones de los tratados especificados en el anexo o tipificados en cumplimiento de esas disposiciones. La competencia de la corte debe complementar la de los sistemas nacionales de justicia penal. Ya en 1989, cuando volvió a someter a la Sexta Comisión, con el apoyo de los Estados miembros de la CARICOM, la idea de establecer un tribunal penal internacional, Trinidad y Tabago observó que el establecimiento de ese tribunal debía presentar a los gobiernos una tercera vía necesaria cuando resultasen imposibles el enjuiciamiento ante los tribunales nacionales o la extradición. A fin de tratar de manera eficaz algunos crímenes graves, como el tráfico de drogas en gran escala y las actividades conexas, por ejemplo el blanqueo de capitales y los actos de terrorismo, hay que contar con un mecanismo internacional.

60. Es correcta la redacción del artículo 22, que no confiere automáticamente competencia a la corte respecto de algunos crímenes cuando el Estado pasa a ser parte en el Estatuto. Si bien, en principio, el concepto de la "declaración de exclusión" parece más deseable, es probable que el sistema de la "declaración de aceptación" facilite una mayor universalidad de la participación en los procedimientos de la corte.

61. Las disposiciones del Título IV son en general satisfactorias. El acceso a la corte debe limitarse a los Estados partes. También es de fundamental importancia que en la fase preliminar de la investigación se garanticen todos los derechos del sospechoso, como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La redacción del artículo 32, junto con lo establecido en el artículo 58, responde de manera práctica a la preocupación de algunos Estados pequeños, que temen que el enjuiciamiento y la detención de algunos criminales internacionales, como los narcotraficantes en gran escala, puedan recargar sus sistemas judiciales y amenazar gravemente su seguridad. La

disposición del artículo 34, sumamente importante, facilitará la determinación de la competencia de la corte. Sin embargo, deberá definirse el término "Estado interesado", ya que una interpretación muy amplia quizá no facilite la labor de la corte y obstaculice su funcionamiento.

62. Las excepciones a la regla general de que el acusado ha de estar presente en el juicio sólo deberán permitirse en casos excepcionales claramente definidos, como los que se proponen en el párrafo 2 del artículo 37. En ausencia del acusado, deberán respetarse todos sus derechos.

63. La presunción de inocencia es un principio aceptado del common law. La acusación debe probar los cargos que se hacen al acusado. Ahora bien, cabe recordar que, en menor medida, también hay una carga de la prueba que recae en el acusado que debe probar las excepciones de consentimiento, coacción, legítima defensa, provocación, etc., o de justificación general. Esa presunción de inocencia figura en el artículo 40 del proyecto, por lo que debe aprobarse su inclusión. Asimismo, es acertada la disposición del artículo 47. Sin embargo la protección de las víctimas y los testigos no debe redundar en menoscabo del respeto del derecho del acusado a un juicio imparcial. Son satisfactorias las disposiciones del artículo 44, en especial la propuesta de no admitir las pruebas obtenidas por medios ilícitos, lo que constituiría una infracción seria del estatuto o del derecho internacional.

64. No cabe duda de que es necesario contar urgentemente con un organismo internacional permanente que pueda tomar medidas eficaces contra los responsables de crímenes excepcionalmente graves de carácter internacional. La comunidad internacional ya ha demostrado que, cuando existe la voluntad política, se puede establecer este tipo de tribunales, como en el caso del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Ahora bien, no parece posible crear un corpus de derecho penal internacional mediante la institución de tribunales especiales. Un tribunal permanente no sólo contribuiría al desarrollo progresivo del derecho internacional, sino que también podría castigar a quienes, con impunidad, tratan de destruir la trama misma de nuestras sociedades. Por ello conviene dar curso a la recomendación de la Comisión de Derecho Internacional de someter el proyecto de estatuto a los gobiernos en el marco de una conferencia de plenipotenciarios. En este período de sesiones la Asamblea General debería establecer un mecanismo para convocar esa conferencia lo antes posible, a fin de celebrar una convención sobre la institución de una corte penal internacional.

65. La Sra. LADGHAM (Túnez) expresa su agradecimiento a la CDI por los esfuerzos realizados en su 46º período de sesiones y da las gracias al Sr. Crawford, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el proyecto de estatuto de una corte penal internacional y al Sr. Thiam, Relator Especial del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, por la calidad del trabajo presentado.

66. La Comisión de Derecho Internacional, aunque es esencialmente un órgano técnico, ha debido tener en cuenta las exigencias de la realidad, que no coinciden con las del derecho puro, aceptando en gran medida las observaciones hechas por las delegaciones, entre ellas la tunecina, lo que constituye motivo de satisfacción. No obstante, el proyecto suscita las siguientes observaciones: primera, en cuanto al método de creación de la corte, Túnez ya se había

pronunciado a favor de una corte que formara parte integrante de las Naciones Unidas como órgano principal, para dotarla de una autoridad comparable a la de la Corte Internacional de Justicia. Si se creara por medio de una enmienda de la Carta, tendría una universalidad mayor que si se creara por un tratado.

67. En lo que concierne a la competencia de la corte, observa con agrado que la CDI ha tenido en cuenta el deseo de algunas delegaciones de incluir en la lista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, habría que prever la posibilidad de incluir en la lista del anexo otros instrumentos jurídicos pertinentes que se elaboren en el futuro. Resulta aceptable el sistema de la declaración de aceptación de la competencia de la corte por los Estados con la excepción del crimen de genocidio.

68. En lo tocante al derecho aplicable, considera que el proyecto de código de crímenes debe constituir la base de dicho derecho. Este proyecto debería contener disposiciones que fijen penas precisas para cada crimen sujeto a la competencia de la corte. Hay que encarecer a la CDI que prosiga con celeridad los trabajos de elaboración del proyecto de código, velando naturalmente por armonizar sus disposiciones con las del proyecto de estatuto de una corte penal internacional.

69. Respecto de la financiación de la corte, cuestión estrechamente ligada a la creación de la misma, no parece muy prudente imponer esa carga a los Estados partes en el estatuto, que es lo preconizado por la Comisión en el artículo 2 del proyecto. Como la corte sirve a los intereses de toda la comunidad internacional, sería preferible que se financiara con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, razón de más para crear la corte como órgano principal de esta Organización.

70. Por último, manifiesta que considera prematuro convocar una conferencia diplomática, dadas las dificultades que aún subsisten en cuanto al fondo. Convendría más bien prever la celebración de consultas con miras a allanar las divergencias de opinión.

71. El Sr. HAMAI (Argelia) agradece a todos los miembros de la CDI la calidad de su informe, que cada año aporta un estímulo a los trabajos de la Sexta Comisión y al Sr. Veredechetin su clara y exhaustiva presentación del mismo.

72. Refiriéndose al capítulo II del informe, relativo al proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, rinde homenaje al Sr. Thiam, Relator Especial, por los esfuerzos desplegados, y se congratula de que la Comisión haya reanudado el examen del proyecto de código adoptado en primera lectura en su 43º período de sesiones, en respuesta al mandato conferido por la Asamblea General en la resolución 48/31. Para ello, la Comisión ha examinado la parte general del proyecto de código relativa a la definición de los crímenes, a su calificación y a los principios generales, dejando la segunda parte del proyecto para los crímenes en sí. Celebra que el Relator Especial se proponga limitar la lista de esos crímenes a las infracciones cuyo carácter de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad sea indiscutible.

73. Desea, además, formular algunas observaciones concretas: en lo que respecta a la definición de los crímenes, le parece satisfactoria la solución

propuesta, consistente en adoptar una definición conceptual o general seguida de una remisión concreta a los crímenes definidos en el código.

74. El artículo 5, del proyecto de código, al tiempo que limita la responsabilidad penal a los individuos, no excluye la responsabilidad del Estado. Este artículo debe leerse en relación con otros instrumentos de derecho internacional, como la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En lo que respecta al artículo 6, se plantea la cuestión de la relación entre el proyecto de código de crímenes y el proyecto de estatuto de una corte penal internacional. Para Argelia, se trata de dos aspectos estrechamente vinculados de la cuestión de dotar a la comunidad internacional de instrumentos jurídicos adecuados que le permitan juzgar a los autores de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad: código y estatuto son dos instrumentos indisociables y complementarios, prendas del éxito de esta empresa. Por tanto, es de lamentar la tendencia a tratar de manera autónoma la cuestión de la corte, relegando la cuestión del código a segundo plano. Debe recordarse que la idea de crear una jurisdicción penal internacional surgió ante la necesidad de disponer de un órgano judicial que aplicara el código de crímenes. La cuestión de la corte no es más que un subtema de la cuestión global de la elaboración del código, como demuestra claramente la trayectoria histórica de esta cuestión. Otra cosa es que la dramática actualidad internacional haya conferido a la cuestión de la corte una urgencia particular, pero no sería apropiado adoptar con precipitación el estatuto de una corte de la que previamente no se haya definido el derecho aplicable. Para superar esta dificultad, el proyecto de estatuto de la corte intenta definir en el artículo 20 los crímenes sujetos a su competencia, previendo cinco categorías. De éstas sólo el crimen de genocidio no plantea obstáculo mayor, dada la existencia de la Convención de 1948 sobre el tema. Las demás categorías de crímenes, exceptuada la agresión, figuran por haber sido designadas como crímenes en el estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Es paradójico que se proponga crear una corte penal internacional encargada de aplicar un derecho definido en la decisión de un órgano político, el Consejo de Seguridad, que de ese modo se erige casi en fuente suprema del derecho internacional. La justicia internacional exige independencia frente a las decisiones de los órganos políticos y en el estado actual del derecho internacional positivo sólo la adopción del proyecto de código podría servir de base principal para el derecho aplicable por la futura corte.

75. Hay otras disposiciones del proyecto de estatuto que son motivo de preocupación, en particular el método de creación de la corte, su relación con las Naciones Unidas y su competencia en caso de que el Consejo de Seguridad decida remitirle un asunto con arreglo al artículo 23 del proyecto de estatuto.

76. Refiriéndose a la forma de creación de la corte, considera que no es adecuado hacerlo mediante un tratado, dada la incertidumbre que ello ocasionaría respecto de su universalidad, puesto que los Estados podrán optar por no pasar a ser partes en ese tratado. En cambio, si se creara como órgano de las Naciones Unidas, la corte no sólo tendría el respaldo de la autoridad moral de la Organización y de su carácter universal, sino que se aseguraría la unidad del orden jurídico internacional en materia penal sin menoscabar la independencia y la autonomía de la corte. La objeción de que para ello habría que modificar la Carta no es muy válida, puesto que la celebración de un tratado también es un proceso complejo. Además, actualmente se discute una serie de reformas que

también exigirán una revisión de la Carta, por lo que podría aplicarse el Artículo 109 y convocarse una conferencia general de revisión de la Carta.

77. Una cuestión que guarda relación directa con la anterior es la de la vinculación que debe existir entre la corte y las Naciones Unidas. Lo más indicado sería integrarla en el sistema de las Naciones Unidas, de preferencia como órgano principal, al igual que la Corte Internacional de Justicia. El sistema necesita un órgano judicial en materia de derecho internacional penal para llenar un vacío jurídico real y evitar el recurso a órganos judiciales especiales, cuya creación por un órgano político no es apoyada unánimemente, por razones de índole constitucional y de rigor jurídico.

78. Por lo que respecta a la competencia de la corte, el artículo 23 del proyecto contempla la facultad del Consejo de Seguridad de recurrir directamente a la corte en virtud del Capítulo VII de la Carta, derogando así la norma prevista en el artículo 21, que subordina la competencia de la corte a la aceptación de ésta por los Estados. No hay duda de que de esta manera se amplían apreciablemente las atribuciones que la Carta otorga al Consejo de Seguridad. No se han estudiado con suficiente atención las consecuencias de tal ampliación que, por lo demás, no tiene base jurídica firme. Como esta propuesta no contó con la unanimidad de los miembros de la Comisión, el artículo debería suprimirse. Además, la solución propuesta pasa por alto las prerrogativas de la Asamblea General en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

79. El Sr. PREDA (Rumania) celebra que se haya completado la elaboración del proyecto de estatuto de una corte penal internacional, puesto que es sabido que uno de los inconvenientes del derecho internacional es que carece de mecanismos eficaces para imponer su cumplimiento. Mientras no haya ningún órgano judicial para procesar a las personas que hayan cometido crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, no habrá una codificación sustantiva del derecho internacional en esta materia.

80. Refiriéndose al método de creación de la corte, también es partidario de que sea mediante una convención internacional aprobada en una conferencia de plenipotenciarios. Este método tiene la ventaja de garantizar una amplia aceptación de la convención, requisito previo para el funcionamiento eficaz y normal de la corte, y de preservar la libertad de elección de los Estados para ser partes en la convención o aceptar la competencia de la corte. La complejidad del proceso inclinaría a hacerlo mediante una resolución del Consejo de Seguridad, pero ello rebasaría los límites de las atribuciones de éste a tenor del Capítulo VII de la Carta. Además, las otras soluciones, modificación de la Carta o resolución de la Asamblea General o del Consejo, plantearían problemas difíciles de resolver. En cuanto a las fechas de esa conferencia, se pregunta si no convendría establecer un comité especial que se reuniese entre el período de sesiones en curso y el próximo para dilucidar las cuestiones relacionadas con el tema.

81. Por lo que respecta a la relación con las Naciones Unidas, hay que vincular la futura corte con los órganos principales de las Naciones Unidas, porque de esta manera podrá funcionar eficazmente desde los puntos de vista administrativo y técnico. Sin embargo, como no debe ser un órgano subsidiario, es acertada la

disposición del artículo 2 del proyecto de estatuto que prevé la celebración de un acuerdo para establecer una relación apropiada.

82. La competencia de la corte ratione materiae debería abarcar un número reducido de crímenes muy graves. Cree, pues, que por el momento sólo debería comprender el genocidio, la agresión, los crímenes excepcionalmente graves y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Este parecer se basa en que en materia penal sólo en casos excepcionales están dispuestos los Estados a renunciar a su soberanía en favor de un mecanismo internacional. Finalmente, manifiesta que el texto del estatuto elaborado por la CDI aborda adecuadamente muchos aspectos que podrían considerarse detalles técnicos, pero que en conjunto son el núcleo de un juicio imparcial.

83. El Sr. KOLODKIN (Federación de Rusia) dice que la labor de la CDI en su 46º período de sesiones ha sido muy productiva y que uno de sus logros es la nueva versión del proyecto de estatuto de una corte penal internacional. El texto presentado por la CDI debe constituir la base de los trabajos pertinentes hasta su culminación, ya que contiene normas y soluciones equilibradas y razonables.

84. La competencia de la corte abarca tanto los crímenes de carácter internacional definidos por los tratados vigentes como los crímenes del derecho internacional general, limitándose esta segunda categoría a una serie de casos concretos. La competencia de la corte debe entenderse como un complemento de los sistemas judiciales nacionales. Su ejercicio respecto de los crímenes a los cuales se aplica tradicionalmente el principio aut dedere aut indicare está subordinado al cumplimiento de determinadas condiciones y reviste, por tanto, carácter excepcional. Al mismo tiempo, en circunstancias, también excepcionales, en que se cometan crímenes que, a juicio del Consejo de Seguridad constituyan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, la competencia de la corte llega a ser prácticamente obligatoria, porque el Consejo, de conformidad, con el Capítulo VII de la Carta y prescindiendo del requisito de la aceptación previsto en el artículo 21 del proyecto, puede remitir el asunto a la corte.

85. De la lectura del informe se desprende claramente que la celebración de una convención sería el método más aceptable para establecer la corte, así como para fijar las modalidades de la vinculación entre ella y las Naciones Unidas. Muchos Estados, entre ellos la Federación de Rusia, han advertido con satisfacción que sus observaciones han sido atendidas en la nueva versión del proyecto. Este es un factor importante y una prueba más de la pericia con que la CDI ha llegado a soluciones de avenencia aceptables sobre las cuestiones más controvertidas. Es evidente que aún se formularán observaciones sobre disposiciones concretas del estatuto con el deseo de mejorarlo, pero no está de más insistir en que habrá que procurar no alterar el equilibrio logrado por la CDI en su labor.

86. En definitiva, más que las observaciones concretas acerca de una u otra disposición, lo que realmente interesa en este momento es determinar si la comunidad internacional necesita un tribunal penal internacional de carácter permanente y si están reunidas las condiciones jurídicas y políticas para establecer un órgano de esa índole. La respuesta a ambos interrogantes es

positiva. En realidad, sería lamentable que el establecimiento de la corte fuese objeto, una vez más, de un aplazamiento indefinido.

87. En efecto, los primeros intentos de las Naciones Unidas por establecer un tribunal permanente en materia penal se hicieron a finales del decenio de 1940. En 1951, cumpliendo instrucciones de la Asamblea General, la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional preparó un proyecto de estatuto de una corte penal internacional, que a la sazón no pudo prosperar. Habría sido sorprendente que el proyecto corriera entonces otra suerte, pero más sorprendente - y tal vez completamente desacertado - sería que la historia se repitiese ahora, dados los decisivos cambios que se han producido en el escenario internacional. Ahora se puede afirmar que hay valores universales compartidos por toda la humanidad y que esos valores han sido consagrados en el derecho internacional general, en los tratados y convenciones internacionales y en los principios generales del derecho. Además, se ha instituido un precedente para la creación de un tribunal penal internacional fuera del contexto de la relación "vencedor-vencido" y esto ha originado justificadas expectativas en la comunidad internacional. Ha llegado el momento de que las Naciones Unidas, creadas con la finalidad de preservar la paz y proteger los principios de derecho generalmente reconocidos contra los ataques de criminales y grupos de criminales, establezcan una corte penal internacional con carácter permanente.

88. Por supuesto, la finalización y perfeccionamiento del proyecto de estatuto requerirán algún tiempo, pero el transcurso de uno o dos años más tiene poca importancia; lo que interesa es adoptar ahora una decisión que demuestre claramente la voluntad política de los Estados Miembros de llevar la idea a la práctica. Para ello, es necesario establecer un comité preparatorio con el mandato explícito de preparar, dentro de un plazo determinado, la celebración de una conferencia de las Naciones Unidas encargada específicamente de aprobar la convención constitutiva de la corte penal internacional. Esa es la respuesta que la comunidad internacional espera de la Organización.

89. La Sra. FLORES (Uruguay) dice que la labor de la CDI en su 46º período de sesiones ha sido sin duda muy fructífera, en particular, con respecto al proyecto de estatuto de una corte penal internacional y al derecho de los usos de los cursos de agua para fines distintos de la navegación.

90. Refiriéndose concretamente al primero de esos temas, señala que, si bien sus orígenes se remontan a varios decenios, cobró carácter prioritario mediante la resolución 47/33 de la Asamblea General, de 25 de noviembre de 1992. En la aceleración de ese proceso mucho han influido las situaciones que motivaron el establecimiento por el Consejo de Seguridad del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la posibilidad de extender su competencia a las violaciones de los derechos humanos que se producen en Rwanda.

91. La perspectiva de multiplicación de los tribunales especiales y los problemas que puede crear en cuanto a certeza, estabilidad, falta de uniformidad en el derecho aplicable y otros aspectos, a lo que cabe agregar la necesidad de dar una respuesta adecuada a situaciones de especial tirantez internacional, han motivado que el tema adquiera actualmente renovada vigencia. Por ello, cabe apoyar la sugerencia, que figura en el párrafo 17 del informe de la CDI, de que se convoque una conferencia internacional de plenipotenciarios para examinar el proyecto de estatuto y concertar una convención sobre el establecimiento de una

corte penal internacional. Además, el Uruguay cree que, dada la jerarquía del mecanismo, la corte debe ser un órgano de las Naciones Unidas.

92. En razón de la naturaleza, complejidad y especificidad de sus actividades y del incremento del número de casos que podrían quedar dentro de su órbita, es conveniente que la corte se establezca como órgano permanente, con dedicación plena. Sin embargo, es comprensible la posición de quienes prefieren soluciones más flexibles y consideran que se debe llegar a ese resultado por etapas, habida cuenta de las posibles dificultades de orden económico y práctico.

93. El derecho aplicable debe ser el derecho internacional público, aunque esta es una cuestión que requiere mayor profundización. Por ello, y porque la cuestión guarda estrecha vinculación con el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, sin limitarse a él, sería conveniente que este proyecto se finalizara cuanto antes.

94. Las cuestiones de competencia que se examinan en el Título III constituyen la parte central del proyecto de estatuto. En lo que respecta a la competencia ratione materiae, las actuales circunstancias indican que lo posible es que la corte juzgue únicamente a individuos. Sin embargo, será necesario compatibilizar lo establecido en el artículo 20 del proyecto de estatuto con el proyecto de artículo 19 sobre la responsabilidad de los Estados, que distingue entre crímenes y delitos internacionales y en donde el Estado, además de estar obligado a ofrecer reparación por el crimen cometido, es susceptible de ser sancionado. También debería aclararse la tipificación del crimen de agresión (inciso b) del artículo 20 del proyecto de estatuto) que, según la resolución 3314 (XXXIX) de la Asamblea General, sólo puede ser cometido por Estados, y hacerla concordar con el artículo 15 del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Además, suscitan reservas las disposiciones del artículo 23.

95. La competencia ratione materiae es sumamente compleja, por lo que deberá buscarse la plena vigencia de dos principios consagrados del derecho penal: nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, que han sido parcialmente recogidos en el proyecto.

96. Si bien el derecho internacional no prohíbe, desde el punto de vista estrictamente jurídico, los juicios in absentia, la tendencia actual en materia de derechos humanos es restringir este tipo de proceso, como se establece en el inciso d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

97. El Uruguay ya se ha pronunciado en favor de la figura del fiscal y está de acuerdo con la estructura propuesta en el proyecto.

98. El Sr. RABBANI (Pakistán) dice que para llevar a la práctica el apartado b) del párrafo 1 del artículo 19 será necesario promulgar disposiciones de derecho sustantivo. Si bien el párrafo 2 del artículo 19 dispone que los detalles de procedimiento se fijarán en el reglamento de la corte, a fin de que el proceso judicial se desarrolle con imparcialidad, esas normas deberían formar parte del Estatuto. Por otra parte, deberán definirse con más claridad los crímenes enumerados en el artículo 20, en particular el término "agresión".

99. Causan preocupación las disposiciones sobre ejecución de las penas, descritas en el capítulo VIII del proyecto. En muchos Estados Miembros dichas disposiciones plantearán importantes cuestiones constitucionales. Como alternativa, las sentencias de la corte podrían ejecutarse de conformidad con distintas disposiciones definidas en el derecho internacional.

100. Deberá examinarse más a fondo el párrafo 3 del artículo 23, ya que no puede excluirse la posibilidad de que con la intervención del Consejo de Seguridad se politicen los procedimientos judiciales.

101. Será preciso definir claramente el derecho sustantivo, el derecho procesal y el reglamento de la corte a fin de garantizar los derechos civiles de los sospechosos y los acusados. De lo contrario, será difícil que los Estados Miembros cooperen al respecto. En el sistema de justicia internacional hay que prestar especial atención a la protección de los derechos del acusado, teniendo en cuenta factores que quizás a menudo no sean pertinentes en el contexto nacional.

102. A fin de evitar las ambigüedades, deberán definirse en términos más claros las disposiciones relativas a las condiciones que han de reunir los magistrados, las medidas disciplinarias de que puedan ser objeto y los procedimientos de investigación y enjuiciamiento.

103. La corte deberá complementar los sistemas de justicia penal nacionales y deberá actuar en la medida en que se solicite su participación. Además, su competencia deberá limitarse a las personas, y no incluir a los Estados, ya que ello sería contrario al principio de la soberanía y de la igualdad de los Estados.

104. El establecimiento de una corte penal internacional, con los órganos subsidiarios mencionados en el artículo 5 y otros elementos de infraestructura requiere un enorme despliegue financiero que quizás represente una carga adicional para los países en desarrollo.

105. No habrá verdadero progreso si no se elaboran leyes penales de fondo que definan con precisión los crímenes internacionales y que prescriban penas para los distintos crímenes internacionales. La creación de una corte penal internacional incluye muchas cuestiones complejas y difíciles, entre otras, la competencia, el derecho aplicable, la estructura de la corte, el enjuiciamiento, etc., cuestiones todas que habrán de examinarse con el máximo cuidado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.